

Efectos múltiples de las remesas centroamericanas a México

Rodolfo Casillas R.

Antecedentes

El envío de remesas de los migrantes extranjeros a sus países de origen es una actividad de gran importancia para las personas, países, circuitos sociales y financieros involucrados. Montos, envíos y cobertura territorial son crecientes en todo el orbe. Estimaciones para el año 2006 indican un monto de 264 000 millones de dólares (MDD) en el total mundial de transacciones. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), México recibió remesas familiares en los últimos 15 años por un monto acumulado cercano a noventa y cinco mil MDD (a precio corriente).¹ Para 2006, ingresaron al país 23 054 MDD.²

El universo receptor de remesas en los países centroamericanos creció y se diversificó social y territorialmente en los últimos años. Por ejemplo, la suma de los montos recibidos por Guatemala, Honduras y El Salvador en el año 2000 fue de 2724 MDD y para 2005 se incrementó a 7611.³

¹ Conapo, *La nueva era de las migraciones*, México, 2004, p. 82.

² The World Bank, *Migration and Remittances Factbook*, en <http://go.worldbank.org/QOWEWD6TA0>.

³ *Idem.*

Las remesas tienden a incrementarse en la medida en que se facilita el acceso al servicio de envío electrónico, disminuyen los costos de la transacción, se diversifica territorialmente la red de servicios en los lugares de tránsito y destino, se cuenta con distintos oferentes de servicios y se incrementa el flujo de migrantes. Estos procesos institucionales y sociales han ocurrido en los últimos años. Las tendencias indican un mayor desarrollo y complejidad de la relación remesas-migración-sociedad. En momentos de expansión o estabilidad económica este sistema de envíos crece más fácilmente. Sería interesante observar cómo una eventual contracción de la economía estadounidense afecta esta red de servicios, aunque lo destacable por el momento sea el reciente establecimiento de este recurso financiero y el uso que de él hacen los transmigrantes centroamericanos, independientemente de las fluctuaciones en el flujo de envíos en el corto plazo.

Estados Unidos es el principal destino de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en general. Del total de migrantes indocumentados en Estados Unidos, 80% provienen de México y América Latina, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).⁴ Y de esta última —América Latina—, la población centroamericana es la más numerosa. La gran mayoría de los centroamericanos van y regresan de Estados Unidos pasando por México. De esta suerte, México es estratégico para el paso centroamericano, no sólo por el desplazamiento poblacional que implica, sino porque éste requiere de recursos económicos para ser posible.

⁴ International Organization for Migration (IOM, por sus siglas en inglés; en español, Organización Internacional para las Migraciones, OIM), *World Migration 2005. Costs and Benefits of International Migration*, Ginebra, 2005, p. 88.

Observaciones de campo referentes a la transmigración centroamericana por México⁵ permiten señalar que los centroamericanos residentes en Estados Unidos envían de manera periódica montos determinados de remesas para sus connacionales que transitan por México a fin de proveerlos de los recursos necesarios en su viaje. Otros montos, presumiblemente inferiores, son enviados desde Centroamérica para ayudar a regresar a quienes, ya estando en México, desisten, por distintas causas, de proseguir el viaje a Estados Unidos. Es tal el flujo de transmigrantes por México,⁶ que las remesas constituyen una importante derrama diaria de divisas de un monto impreciso hasta el momento. Estos envíos quedan a simple vista subsumidos como parte de las remesas de mexicanos en Estados Unidos a mexicanos en México, lo cual es inexacto.

El objetivo de este análisis es presentar la generación de un sistema de servicios financieros para el envío/recepción de remesas utilizado por los centroamericanos en su paso por México y la diversidad de efectos inmediatos y mediatos que esta práctica tiene entre distintos agentes sociales e institucionales en el país. Se incluye una breve prospectiva de los países centroamericanos a la luz de su desarrollo socioeconómico a fin de ponderar la importancia de las remesas y su concatenación

⁵ Con el patrocinio del Fondo Sectorial Segob-Conacyt, se efectuó, de agosto de 2005 a diciembre de 2006, el proyecto de investigación titulado “Presente y futuro de los transmigrantes centroamericanos en México”, bajo la responsabilidad del autor de este artículo. En este último se presentan algunos hallazgos del trabajo realizado, relativos a las remesas centroamericanas, en los términos en que se observaron en campo durante 2005-2006 y fueron analizados a la luz del proceso transmigratorio que ocurre en el país.

⁶ Prácticamente, el 90% del total nacional de aseguramientos de extranjeros indocumentados que hace el Instituto Nacional de Migración (INM) corresponden a los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Centroamericanos indocumentados, asegurados o no, hacen uso del servicio de envío/recepción de remesas en distintos sitios del territorio mexicano, de manera creciente.

a los espacios de tránsito y de procedencia de los migrantes internacionales bajo estudio. Todo ello invita a profundizar el análisis de la novedosa participación multisectorial, multiinstitucional e internacional en el envío de remesas para el tránsito transmigratorio con más elementos de juicio, algunos de ellos aún de circulación restringida.

Las remesas para la transmigración

Los envíos de remesas se pueden realizar gracias a la extensa red de servicios bancarios existentes en la región, que conectan a Estados Unidos, México y Centroamérica. En México existen al menos dos grandes redes para el cobro de remesas. La existencia de cientos de sitios de cobro en distintas localidades y el hecho de que la ubicación de un sinnúmero de ellos coincida con las rutas migratorias del sur al norte del continente ha alentado la práctica de los envíos electrónicos a los centroamericanos transmigrantes. En tanto que en el país crece de manera constante el flujo centroamericano indocumentado, se consolida la práctica de envío de remesas de y para centroamericanos, quienes ya cuentan con la colaboración/contratación de personas que efectúan los retiros correspondientes, estableciendo, en consecuencia, una red informal de cobro de remesas en sus rutas migratorias por México.

La actividad financiera crece de manera constante. Esta práctica de envíos dosificados de remesas (en promedio desde 20 hasta un máximo de 150 dólares por envío) también genera nuevos mecanismos y formas de cohesión social entre transmigrantes centroamericanos de tránsito por tierras mexicanas, y entre ellos y grupos sociales locales. Ésta es, en consecuencia, otra cara de las remesas escasamente conocida y analizada a la luz de los procesos de articulación y cohesión entre migrantes,

entre éstos y sus patrocinadores en Estados Unidos, entre migrantes y entornos sociales por los que transitan y, a final de cuentas, entre migrantes y los núcleos sociales allende fronteras, tanto en lugares de procedencia, como de tránsito y de destino. Es decir, un fortalecimiento del tejido social *desde, por y para* el mundo subalterno de los migrantes, con efectos que no se circunscriben a dicho mundo ni tampoco se limitan a los espacios territoriales nacionales de donde son oriundos los transmigrantes.

Para el envío de divisas existen acuerdos diversos y muy versátiles entre las empresas involucradas. Un ejemplo de ello es el de Elektra, que ofrece servicios varios (venta de electrodomésticos, financieros, bancarios y crediticios) que hacen más fácil el retiro y uso de los envíos del exterior. La empresa citada tiene un convenio con Western Union además de otros específicos con negocios menores del ámbito local, para que en el interior de aquéllos se realicen las operaciones de envío y cobro de remesas. Para octubre de 2006 dicha empresa contaba con una amplísima red de locales en los que se podía hacer el cobro de remesas: 1569 en México, 74 en Guatemala, 70 en Honduras, 30 en Panamá y 81 en Perú, con planes de expansión tanto en los países citados como en otros del entorno centroamericano y andino.⁷ Las rutas migratorias pueden ser un referente para la ubicación de los centros de cobro de remesas, dada la diversidad de servicios y actividades que se ofertan en esos espacios de venta múltiple, a considerar de importancia mayor en las estrategias de las empresas involucradas, por los montos crecientes de dólares en efectivo que los envíos significan.

Esta red de cobro es la más frecuentada por los transmigrantes indocumentados, al menos en México, si bien el servicio

⁷ La información aquí presentada fue proporcionada por la Gerencia de Transferecias Internacionales del Grupo Elektra.

es utilizado por familiares de migrantes mexicanos, igualmente indocumentados en Estados Unidos. Western Union, por otra parte, tiene otro acuerdo similar con una importante red nacional bancaria en el país, presumiblemente más utilizada por los migrantes mexicanos y sus destinatarios, entre otras cosas porque la normas de seguridad bancaria no ofrecen hasta el momento garantías suficientes para que los transmigrantes centroamericanos hagan pleno uso de esta otra opción; es decir, la presencia del personal de seguridad en los bancos, por ejemplo, inhibe a los extranjeros indocumentados, quienes prefieren acudir mayoritariamente, de manera personal o por interpósita persona, a los locales de cobro que les den más seguridad individual, como son los de Elektra-Western Union.

Durante muchos años, México se caracterizó por ser un país de emigrantes. De ahí que los estudios correspondientes se orientaran a analizar los flujos migratorios de mexicanos a través de la frontera norte del país. No obstante, a partir de las últimas dos décadas del siglo xx se empezaron a observar flujos cada vez más importantes de inmigrantes y transmigrantes a través de la frontera sur mexicana, principalmente centroamericanos: algunos en tránsito hacia Estados Unidos; otros, cuyo destino original ha sido trabajar temporalmente en México para después regresar a su país de origen. Los menos han sido aquellos que deseaban cambiar su residencia a México de manera definitiva.⁸

El motivo principal de esta emigración centroamericana (ya sea a México o a Estados Unidos) es la necesidad económica.

⁸ Según el Censo Nacional de Población del año 2000, residían en México 23 957 guatemaltecos y 5 537 salvadoreños. El número de otras nacionalidades centroamericanas es tan bajo que quedan agregados a las cifras de Otros y No especificados: 62 095. En total, señala la fuente oficial, en el 2000 residían en México poco menos de medio millón de extranjeros, lo que significa 0.5% de la población total; es decir, una cifra muy baja.

La falta de fuentes de empleo y mejores salarios constituye la principal causa que estimula esta migración internacional. En algunos casos esta migración se da de manera documentada, pero en otros ocurre de manera indocumentada —como en el caso de Honduras; donde por cada 100 hondureños que emigran con destino a Estados Unidos, el 7% lo hace legalmente, 17% logra su objetivo de entrada aun sin documentos, 75% son deportados desde México y el 1% se queda en el camino, sea en México o en Guatemala.⁹ Otros centroamericanos actúan de manera similar, como es el caso de los guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses.

En efecto, desde un punto de vista histórico general y particular para Centroamérica, el principal volumen y nacionalidad de extranjeros que son detenidos por las autoridades migratorias mexicanas por carecer de la autorización migratoria correspondiente, o bien por haber caducado la vigencia de ella, corresponde a dichas nacionalidades. Del total nacional de extranjeros asegurados por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), los guatemaltecos constituyen casi el 46%, los hondureños un 28%, los salvadoreños un 20% y los nicaragüenses un 1%. El restante 5% de indocumentados asegurados lo nutre el resto del mundo. En 2006, el total nacional de aseguramientos fue cercano a los doscientos cincuenta mil.¹⁰

Las cifras anteriores destacan el gran número de personas que son detenidas en el tránsito y antes de llegar a su destino; sobre todo aquellos que se dirigían a Estados Unidos. A partir

⁹ *Situación Migratoria Honduras 2005*. Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH). Semana del Migrante 2005. Página web: http://migracion-remesas.rds.hn/document/semana_del_migrante/situacion_migratoria_honduras_2005.pdf.

¹⁰ Cálculos propios basados en *Datos estadísticos migratorios de México*, México, Instituto Nacional de Migración-Secretaría de Gobernación, años de 1990 a 2006.

de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, cuando el fenómeno migratorio se subordinó de nuevo a las prioridades tanto de la seguridad nacional como de la del norte de América; los gobiernos de México y Estados Unidos reforzaron las medidas tendientes a frenar y controlar esta migración ante una eventual incursión terrorista.¹¹ Adicionales controles migratorios complicaron aun más el ya de por sí difícil trayecto hacia Estados Unidos.¹² La mayor complicación para la transmigración indocumentada volvió, en consecuencia, más estratégica la existencia y el concurso de redes auxiliares a la migración, así como el proceder articulado, cohesionado, de los migrantes a fin de lograr su travesía con los menores daños posibles. El apoyo solidario se fue logrando de manera progresiva, pero migrar con todos los recursos económicos posibles para la larga travesía hacía más riesgoso transitar por suelo mexicano. Este riesgo fue modificado, que no necesariamente reducido,

¹¹ Entre otras, habría que recordar las siguientes medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, algunas en convenio con sus Estados vecinos: Acta Patriótica, 2001, que triplica personal de inspección migratoria, aduanas y patrulla fronteriza en frontera con México, incrementa presupuesto para equipamiento tecnológico y refuerza regulaciones para impedir acceso de posibles terroristas; Acta sobre Ampliación de la Seguridad y Reforma de las Visas de Entrada (EBSVERA), 2002; Programa Nacional de Seguridad Nacional de Registro de Entrada y Salida (NSEERS), 2002; Programa US-Visit (Visitor & Inmigrant Status Indicator Technology), 2003; Student & Exchange Visitor Information System (SEVIS), 2003; Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), marzo de 2005, de Canadá, Estados Unidos y México; Programa bilateral México-Estados Unidos para la Persecución de Traficantes de Migrantes (Programa OASSIS), agosto de 2005; Iniciativa de Fronteras Seguras, Estados Unidos, noviembre de 2005, nuevo nivel de prioridad en el combate a la migración indocumentada, y The National Security Strategy of the USA, marzo de 2006.

¹² En el año 2000 había 25 estaciones migratorias en México, sitios en los que el Instituto Nacional de Migración recluía a los extranjeros indocumentados asegurados, previa su devolución a sus países de origen o procedencia. Para 2006 se incrementó el número de estaciones migratorias en el país a 52, con 25 de ellas en cuatro entidades del sur sureste: 15 en Chiapas, 4 en Tabasco, 3 en Oaxaca y 3 en Veracruz.

como se verá más adelante, con la utilización creciente de los envíos electrónicos.

La principal puerta de entrada a Estados Unidos es México. Pese al despliegue de impresionantes recursos tecnológicos, de innovaciones técnicas en el control de fronteras y de un número creciente de personal de vigilancia después de 2001,¹³ la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo notoriamente porosa. Como ejemplo de ello, las fuentes gubernamentales mexicanas reconocen que 400 000 mexicanos ingresan al año y se quedan en dicho país de manera indocumentada. Por su parte, la inmigración centroamericana ha entrado a México a través de numerosos puntos de cruce —las más de las veces sin documentos—, situados en una región de gran complejidad geográfica, lo que dificulta el acceso (también el control migratorio) y su desplazamiento se complica a medida que se avanza en el trayecto hacia Estados Unidos (los migrantes hablan de una frontera vertical por México debido a la cantidad y variedad de controles migratorios¹⁴ que encuentran en su ruta sur-norte, sean legales o no). Estas circunstancias geográficas y de política migratoria han vuelto más valiosas las redes sociales de apoyo al migrante, así como la prestación de servicios diversos, legales o no, para que la migración ocurra.

Sería deseable establecer la magnitud de estos desplazamientos y de las personas que los constituyen, con sus distinciones por nacionalidad, por género, por grupos etarios y étnicos. No obstante el creciente número de estos grupos de inmigrantes, los movimientos de personas nacidas en Centroamé-

¹³ Juan Artola, “Las relaciones entre migración y seguridad y su impacto en los flujos migratorios en México”, México, 2006, mimeo.

¹⁴ Además de operativos sorpresa, denominados “volantas” en el argot del personal del INM, que ocurren con más frecuencia en distintas vías de comunicación terrestre, en particular en las ferroviarias y en las carreteras de mayor tránsito vehicular.

rica —que cruzan principalmente de manera indocumentada por México— no han sido objeto de observación, caracterización demográfica y medición mediante procesos rigurosos, particularmente los que ocurren en la frontera Guatemala-México. De entrada, está el problema de la inexistencia de fuentes confiables para hacer dichos análisis poblacionales.¹⁵

Según los reportes estadísticos del INM, en los últimos 20 años se observa que los guatemaltecos constituyen de manera constante el mayor volumen de los asegurados, seguidos a distancia en un segundo lugar por los salvadoreños en los años ochenta y principios de los noventa, y luego sustituidos por los hondureños desde finales de los noventa, hasta el presente. Los de Nicaragua fueron desplazados en la estadística nacional total a un cuarto lugar (pero conservan su lugar en lo que a Centroamérica se refiere), posición que ya es ocupada por los oriundos de Ecuador. Aunque hay estos reajustes respecto de los orígenes del total de asegurados, las nacionalidades centroamericanas mencionadas siguen constituyendo, en los últimos 20 años, entre el 90% y el 94% del total de aseguramientos que ocurren en México de manera invariable hasta el presente y, por lo que se verá a continuación, la alta proporción centroamericana en el total de asegurados se mantendrá constante.

Este comportamiento de ascensos y descensos en la población centroamericana detenida en México y posteriormente devuelta a sus países de origen no sigue el patrón ascendente que muestran los inmigrantes mexicanos con destino a Estados Unidos. La

¹⁵ Hasta el primer trimestre de 2006, por ejemplo, en la Delegación Regional del INM en Tapachula, Chiapas, del extranjero indocumentado asegurado sólo se registraba el nombre, la nacionalidad, el sexo y algún otro dato administrativo de control interno. Esos datos resultan insuficientes para la caracterización sociodemográfica del indocumentado, justamente en la región geográfica y jurisdiccional que, históricamente, es transitada por el mayor volumen de transmigrantes indocumentados.

explicación a estos diferenciales es difícil de precisar y muestra la necesidad de complementar estos señalamientos con estadísticas de los países de origen y destino, como una referencia necesaria para establecer el número de personas que se están moviendo de un país a otro. A la carencia de datos sólidos sobre los transmigrantes centroamericanos en México, también debe añadirse la omisión y las debilidades de las bases estadísticas del lado de las comunidades expulsoras. En general, se observa que los países de la región centroamericana muestran un rezago significativo en materia estadística y aspectos poblacionales, en lo referente a desfases, problemas de cobertura en su ejecución y retrasos —específicamente en el caso de los censos—, sin contar con los problemas de distribución, accesibilidad y confiabilidad en la información oficial en materia migratoria. Los países expulsores han puesto poca atención en la creación de formas alternativas para documentar y analizar la salida de sus nacionales indocumentados de sus respectivos territorios. Pareciera que el pragmatismo del beneficio inmediato que producen las remesas en el producto interno bruto (PIB) hace que los gobiernos centroamericanos involucrados no analicen, menos conduzcan constructivamente, la multiplicidad de efectos positivos que la transmigración tiene en sus países de origen. Frente a estos rezagos, insuficiencias e incertidumbres, lo cierto es que los flujos migratorios siguen constantes, ensanchando las vías de traslado y dinamizando los vínculos sociales que les facilitan su travesía internacional.

Por lo antes dicho, es necesario indicar que, de manera adicional, es difícil establecer un perfil demográfico de esta población transmigrante, y compararla entre sí en distintos momentos, debido a que las fuentes que contienen la información no son tampoco comparables, o se carece de los datos pertinentes. Más aún: en el caso de estimaciones sobre el crecimiento de estos flujos a corto y mediano plazo, la situación se complica por

la carencia de registros en lo que se refiere a la estructura por edad, a la temporalidad y territorialidad con la que se recoge la información —como en el caso ya señalado de los registros del INM. De esta forma, la exploración de cómo inciden estas variables demográficas en los mercados laborales regionales y en la urdimbre social migratoria quedan, por lo pronto, pendientes.

Múltiples receptores y múltiples beneficios

En 2002 se estimó que el total de remesas enviadas por los centroamericanos a sus países de origen sumó la cantidad de 4894 MDD (1579 a Guatemala; 1935 a El Salvador; 730 a Honduras, y 660 a Nicaragua). Dado el efecto de los envíos monetarios en el PIB de los países receptores (7.8 para Guatemala; 15.1 El Salvador, 11.5 Honduras y 29.9 Nicaragua), difícilmente habrá un desaliento por parte de los respectivos gobiernos a dichos envíos. Las remesas para a) el *tránsito* y b) para los lugares de *origen* o *procedencia* de los migrantes son dos tipos de envíos estrechamente relacionados. Las que facilitan el traslado se han vuelto cada vez más importantes y ambas tienden a incrementar su monto más allá de las políticas migratorias de sus países de origen, que por lo demás no las inhiben. Por el contrario, es de esperar que ocurran mayores facilidades para que éstas se incrementen; máxime si una recesión de la economía estadounidense llegara a presentarse, con los efectos inmediatos y de mayor duración en las economías altamente dependientes de aquella, como son los casos de México y Centroamérica.

En esa misma lógica de envíos habría que incluir a los ecuatorianos, aunque, en este caso, los que transmigran por México lo hacen en números relativamente menores comparados con la fuerte emigración de esta nacionalidad a España. Y en la procedencia de las remesas, a diferencia de los casos

antes citados, habría que incluir significativamente las procedentes de Europa, tema que no se aborda en este texto. No obstante ello, dado que también tiende a crecer el flujo ecuatoriano por México, habría que considerar su inclusión, a la luz, al menos, del siguiente indicador: el monto total de las remesas de ecuatorianos en el exterior a su país natal pasó de 382 MDD en 1995 a 1205 en 2000, según cifras del Banco Central del Ecuador. Es decir, en un quinquenio se disparó significativamente el monto de las remesas, con efectos considerables en la balanza comercial ecuatoriana, la economía del país, la gobernabilidad social y, sin duda, con una fuerte inyección de liquidez a la economía doméstica de las familias y entornos sociales receptores. Ese gran aumento en los montos se acompaña de un importante incremento en el volumen de emigrantes ecuatorianos, parte de él asegurado por el INM, según las siguientes cifras: 412 en 1995, 2378 en 2000 y 3276 en 2005. Desde esta perspectiva, aunque con sus diferencias, que en su momento habría que establecer, la migración ecuatoriana vía México podría formar ya parte del conjunto de flujos migratorios dignos de destacar en la transmigración regional al norte del continente.

Por lo antes expuesto resulta pertinente analizar cómo los envíos escalonados funcionan con beneficios múltiples para actores sociales diferentes:

—*Para el emisor.* Le permite el envío de montos menores (de 20 a 150 dólares, como máximo) en plazos determinados. Ya no es necesario un periodo mayor de tiempo para acumular el monto total de lo requerido para el traslado, antes de que éste se inicie, máxime que los costos económicos totales se han incrementado. A la vez, se anula el riesgo de pérdida total o mayor, circunstancia que prevalecía cuando no había la modalidad de los envíos escalonados. Ciertamente, prevalece el riesgo de la pérdida del envío dosificado, pero éste, de ocurrir, es un costo menor y de absorción relativamente fácil.

—*Para el receptor.* Contar con la liquidez necesaria para cubrir una etapa determinada del trayecto es una doble garantía: puede cubrir la distancia o trayecto deseado y le da una relativa garantía de vida. Esas erogaciones incluyen el “derecho de paso” que, de manera irregular, de acuerdo con la ley, pero regular debido a la práctica consuetudinaria, cobran agentes gubernamentales (corrupción) o actores sociales (asalto, robo, prestación de algún servicio, adquisición de alimentos, medicamentos u otro bien necesario). Hacer esos pagos indebidos le significan al migrante poder transitar con riesgos menores, que no son tan menores para el caso de las mujeres que son objeto de acoso y abuso sexuales, independientemente de que pudieran hacer las erogaciones monetarias exigidas; o de aquéllos que son objeto de secuestro *express*, como ocurre en localidades de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, por citar los casos más conocidos, los cuales repercuten en el emisor de los envíos, sea que éste se encuentre en Estados Unidos o en el país de procedencia del transmigrante. Es decir, cabe la presunción de que la mayor parte del total de las remesas para el traslado, o paso por México, se destinan a cubrir los “derechos de paso” exigidos de manera ilegal.

—*Para las redes delictivas.* Contar con ingresos seguros, así sea una labor atomizada que les requiera más tiempo y esfuerzo, sin recurrir de manera necesaria a la violencia extrema, les da un beneficio adicional: su acción delictiva, al atomizarse, obstaculiza que sea vista en su justa dimensión tanto por las autoridades públicas, por los organismos humanitarios, como por los propios migrantes afectados. En consecuencia, ese encubrimiento inhibe el conflicto social, desarticula la protesta activa de los afectados y no da lugar a la acción correctiva gubernamental, que por lo regular procede ante hechos de notoria espectacularidad, como ocurre con los secuestros de migrantes mencionados en el párrafo anterior, que es otra modalidad de-

lictiva que en muchos casos involucra a otro tipo de organización de delincuentes.

—*Para las instancias gubernamentales.* La existencia de un mecanismo ad hoc que inhibe, distiende o pospone el conflicto social, así exista y opere sin control estatal, disminuye en el corto plazo la presión social sobre el Estado, en particular sobre las instancias del Ejecutivo con responsabilidad en materia social, migratoria, laboral y de justicia. En el mediano y largo plazos los costos son mayores y en el corto ya hay indicios de problemas de seguridad pública.

—*Para las organizaciones sociales humanitarias.* Algunas, no todas, y bajo diferentes perspectivas y prácticas, facilitan un servicio asistencial que, sin proponérselo en muchos casos, pasan a formar parte de una más amplia estrategia social de reproducción de la migración indocumentada. En esta diversidad de participaciones sociales hay que considerar la existencia de una pluralidad de redes de apoyo que no necesariamente procede de manera unívoca y coordinada en su labor humanitaria.

—*Para las empresas bancarias y de bolsa.* En tanto medios internacionales por los que se realiza el envío de remesas, incrementan su cartera transnacional de clientes y servicios, es decir, aumentan su presencia y ganancias en un mercado internacional promisorio. Sin negar los beneficios de su actividad legal, hay un amplio horizonte de utilidades sociales que apenas se empieza a explorar. Dicho de otra forma, ampliación de cartera de clientes y oferta de servicios específicos para transmigrantes es una ecuación que aún tiene mucho por desarrollar, sobre todo si se piensa en los requerimientos de salud, protección y seguridad para el receptor del envío electrónico, así como en la creación de mecanismos de cobro que hagan innecesaria la participación de una interpósita persona.

Este conjunto de prácticas, no necesariamente coordinadas todas entre sí, pero que ocurren de manera simultánea, y algunas se complementan, genera un valioso mecanismo de reproducción y cohesión sociales de los migrantes en su calidad de grupos subalternos de alta vulnerabilidad social en un espacio territorial ajeno, el “interregno” mexicano. La eficacia de este mecanismo, por otra parte, contribuye a explicar el crecimiento y diversificación de los flujos, a pesar de las políticas migratorias altamente selectivas que les excluyen. Dicho de otra manera, las remesas para los migrantes en tránsito por México aportan un *plus* cohesionador intangible, pero altamente eficaz al contrarrestar efectos secundarios y perversos (como la corrupción y las actividades delictivas) de las políticas de desaliento y contención de la migración indocumentada. De manera adicional, este mecanismo atenúa el conflicto social, y lo convierte en tensión constante, en tanto sean efectivos y satisfactorios los efectos redistribuidores de las remesas para el traslado entre los distintos actores sociales involucrados.

Claves para el papel futuro de las remesas

La situación de los países involucrados y sus gobiernos (Estados Unidos, México y Centroamérica) permite prever el engrosamiento de la migración internacional indocumentada, la búsqueda de nuevos mecanismos de envío de los migrantes, así como una mayor diversificación de las rutas migratorias en el tránsito hacia el norte del continente. La dinámica de la oferta responde, en parte, sólo en parte, a los requerimientos de la demanda, a la luz de los procesos que ocurren en los lugares de residencia previa de los migrantes. Todo ello implica el ensanchamiento de redes sociales de apoyo, así como la generación de más, o nuevas, actividades asistenciales y delictivas.

La finalidad de este apartado es examinar una serie de indicadores y estimaciones del futuro inmediato que permitirán dar un contexto general de cuatro países emisores de migrantes: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. A la luz de estas tendencias estructurales podrá apreciarse que el reciente aporte cohesionador de las remesas es un producto social en plena expansión para la transmigración, el cual se magnificará ante las tendencias que impulsan el engrosamiento de los flujos, la diversificación de su composición social, geográfica, etaria, ocupacional y de género, así como por las dificultades diversas durante el tránsito, la llegada y estadía en el lugar de destino.

Dentro de los principales indicadores generales para el grupo de países seleccionados está el volumen y composición de la población.¹⁶ Para los próximos años se estima un crecimiento poblacional moderado para este grupo de países, hasta el año 2010, cuando la población aumentará, en particular para el caso guatemalteco. Este resultado podría suponer que la población de este grupo de países crecerá de manera poco controlada. No obstante, examinando las tasas de crecimiento para estos mismos países, hasta el año 2015, se observa que las tasas de crecimiento van en franco declive. La explicación del incremento en el volumen de población reside precisamente en la inercia demográfica de cada país estudiado. Acorde con este razonamiento, Guatemala evidencia la tasa de crecimiento con más altibajos, y para el año 2015 experimentará una tasa de crecimiento superior a El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Estos datos invitan a observar la composición por edad de la población bajo estudio. Los datos de la CEPAL indican que en

¹⁶ Las reflexiones de este apartado se sustentan en el *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2005*, CEPAL/Banco Mundial; *Informe sobre el desarrollo mundial 2005*, FAO; *El estado mundial de la agricultura y la alimentación*, SOFA, 2005; *Informe sobre Desarrollo Humano 2005*, PNUD.

1990, en los países estudiados, cuatro de cada diez personas eran niños y niñas de entre 0 y 14 años, mientras que tres de cada diez tenían entre 15 y 34 años. La suma de ambos contingentes revela una estructura por edad muy joven, pues siete de cada diez individuos contaban con 35 años de edad o menos. Para el año 2050, el mayor contingente de población exhibirá un espectro más amplio de edades al incluir al intervalo de 35 a 49 años. No obstante, estas poblaciones seguirán siendo jóvenes, en comparación con estructuras de países más desarrollados, y consecuentemente más envejecidos como, por ejemplo, Estados Unidos.

El examen de la composición por edad de la población sujeta a estudio señala que una gran parte de la población es joven, y así seguirá durante mucho tiempo más. Si se examina la evolución de la esperanza de vida al nacer se observa que ésta aumentará conforme transcurre el tiempo de forma tal que en un lapso de 35 años se incrementará en promedio cinco años, a excepción de Guatemala, la cual evidenciará un aumento de siete años potenciales.

El crecimiento de la población debido en gran parte a la inercia demográfica y el aumento de la esperanza de vida al nacer, remarca la importancia que tiene para cada país estudiado el proporcionar satisfactores esenciales a su población, como empleo, educación vivienda y servicios de salud, entre otros. Con respecto a la densidad de población, El Salvador evidencia una gran concentración de personas por kilómetro cuadrado así como el índice más bajo de superficies agrícolas per cápita del grupo estudiado, y de Centroamérica en general. Los indicadores para el caso de Guatemala son similares a los de El Salvador, mientras que Honduras y Nicaragua exhiben una ligera mejoría con respecto a los dos países antes examinados. En otras palabras, para El Salvador y Guatemala las condiciones son más desventajosas respecto de Honduras y Nicaragua en cuanto a concentración de población y superficies agrícolas cultivables.

Los resultados anteriores apuntan al examen del contexto de desarrollo y particularmente el económico, para esbozar una idea de la situación por la que atraviesan estos países y contextualizar el proceso de migración hacia otros países en la búsqueda de mejores oportunidades.

Un indicador tradicionalmente estudiado para captar el desarrollo económico se refiere al porcentaje de población urbana residente en cada país estudiado. Los datos que presenta el *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2005* de la CEPAL, muestran, desde 1990 hasta 2015, un aumento de población que reside y residirá en localidades urbanas. Sin embargo, las cifras serán diferentes para cada país. Es interesante observar el caso de Guatemala, país para el que los porcentajes de población aumentarán de manera vertiginosa en un periodo de 20 años (1990 a 2010). Incluso sobrepasará a Nicaragua, cuya población urbana aumentará de manera casi constante (7%) en un lapso de 25 años. Hay que hacer notar, sin embargo, que para el año 2000, sólo El Salvador y Nicaragua poseían poco más de la mitad de su población residiendo en áreas urbanas. No ocurre lo mismo con Guatemala y Honduras, pues para dicho año, seis de cada diez individuos residían en zonas rurales.

En relación con los indicadores que miden el desarrollo de los países estudiados, y de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, el mejor posicionado es El Salvador (ocupa el lugar 104 de un total de 177 países), según el Banco Mundial en su *Informe sobre el desarrollo mundial* de 2005, seguido de Nicaragua, Honduras y Guatemala (este último ocupa la última posición de Centroamérica). Se debe resaltar que las posiciones de estos países están ubicadas por encima de la mediana del índice, por lo que su condición está lejos de ser satisfactoria.

De acuerdo con los indicadores de desarrollo, se observa que, en general, entre siete y ocho de cada diez individuos están alfabetizados. Se remarca el caso de Guatemala, con una

diferencia de al menos seis puntos porcentuales respecto del país más cercano (Nicaragua). Además de los indicadores anteriores, se adiciona uno más que corresponde a la mortalidad infantil para menores de cinco años. Guatemala enfrenta la situación más dramática dado que posee el número más alto de muertes infantiles de los cuatro países estudiados y de Centroamérica en general. Aunque El Salvador posee el menor número de muertes de menores, de cualquier forma el indicador es muy alto.

Los resultados indican desventajas inobjetable de la mayoría de los habitantes de los países centroamericanos seleccionados, como el hecho de residir en lugares con gran densidad de población y pequeñas e insuficientes superficies para el cultivo agrícola; poco más de la mitad de su población es rural, su posición respecto del Índice de Desarrollo Humano está por debajo de la mediana y la mortalidad infantil rebasa la de América Latina y el Caribe. El horizonte no es nada halagüeño.

Un indicador importante se refiere a la participación económica de la población. Existen diferencias en la participación económica para ambos sexos entre los cuatro países estudiados. Guatemala es el país con la tasa más baja, y a siete puntos de distancia, comparada con Nicaragua, el país con la mayor tasa de participación económica en 1990. La diferencia de participación en el trabajo es abismal entre hombres y mujeres, y es particularmente dramática para el caso de Guatemala. De nueva cuenta, el caso de Nicaragua presenta una relativa mejora de la participación económica de las mujeres en comparación con las de los tres países restantes (dobla la tasa de participación de las mujeres guatemaltecas), pero aun esta participación económica femenina es muy baja comparada con países desarrollados, como Estados Unidos, en donde las tasas de participación femenina están por encima del 60%.

Las proyecciones para el año 2015 señalan un aumento en la participación económica de la población en general, y por

sexo, para cada país estudiado, excepto para el caso de la población masculina guatemalteca, que presenta una disminución relativamente pequeña.

El PIB per cápita es más bajo para Honduras y Nicaragua y mucho más alto para Guatemala y El Salvador. Por otra parte, Guatemala posee el mayor porcentaje de población económicamente activa (PEA) dedicada a la agricultura, y para el resto de los países el porcentaje dedicado a la agricultura es realmente bajo (menos del 30%). Con respecto a la población en condición de indigencia, Honduras resalta con más de la mitad de su población que recae en esta categoría, seguida de Nicaragua, en donde cuatro de cada diez individuos son indigentes; tres de cada diez guatemaltecos son indigentes y en esta misma categoría recaen dos de cada diez salvadoreños.

No menos preocupantes son los resultados en lo que se refiere a la condición de pobreza. Para Honduras, el caso es dramático, porque casi 80% de su población es pobre, seguida de Nicaragua y Guatemala, y en mejor condición, pero no menos desventajosa, se encuentra El Salvador (casi 50% de su población).

El resultado general es estructuralmente pesimista y puede explicar por qué los individuos nacidos en estos países estudiados buscan con una entendible audacia y valentía, como lo vienen haciendo de manera creciente desde los años ochenta del siglo XX, una mejor alternativa de vida fuera de su lugar de nacimiento, dadas las condiciones, sobre todo económicas, en sus países de origen.

Nuevos rostros de cohesión de las remesas futuras

Ante el escenario descrito, los elementos cohesionadores en la transmigración son y serán exigidos al máximo, y el apor-

te de las remesas dosificadas y escalonadas a lo largo de la ruta migratoria al norte será susceptible de crecimiento y de presumible sofisticación por la conjugación de intereses de los actores sociales e institucionales (como los bancos, tiendas de electrodomésticos, crediticias y Western Union) que tienen un amplio horizonte de beneficios a distinta escala territorial y de divisiones especializadas. Los efectos positivos de esta previsible situación, en consecuencia, formarán parte del imaginario social que acompaña a los migrantes, dándoles, así, una nota de aliento en su peligroso transitar internacional. A la vez, habrá otro tipo de impactos multiplicadores en las visiones empresariales que planifican e inciden en los mercados financieros y de servicios a escala internacional. Será un interesante desafío analizar cómo mejores ofertas de envíos electrónicos, posiblemente asociados a esquemas de satisfacción de otros requerimientos de los transmigrantes y sus familias, alienten los flujos migratorios centroamericanos al norte del continente, con su incuestionable paso y efecto por territorio mexicano.

En esta lógica, debiera ser causa de profunda preocupación la rapidez, dinamismo y capacidad de crecimiento, adaptación y corrupción que muestran las redes delictivas que han hecho de los transmigrantes su presa preferida. Hasta hoy, estas redes delictivas se reproducen y desarrollan sin medida alguna. La captura de un presunto pollero sólo representa la eliminación de un eslabón de una cadena delictiva desconocida, que se rearticula y sustituye rápidamente al eslabón perdido para seguir funcionando sin mayor dilación.

Las diferencias en cobertura, alcance y metodología que caracterizan a las fuentes estadísticas actuales relativas a la trans migración centroamericana y, en última instancia, a la “representatividad” de las poblaciones migrantes, sugieren la necesidad de construir una estrategia que permita generar información de este fenómeno que posibilite analizar la na-

turalidad, dimensión y características de los flujos, como un mecanismo para establecer los efectos que dicha movilidad ha tenido, tiene y tendrá en las comunidades de origen, tránsito y destino, a nivel macro, y también al interior de las familias de estos migrantes, en el nivel micro.

Las remesas centroamericanas a México se vuelven cada vez más importantes para muy distintos agentes sociales e institucionales. Pero sólo será posible justipreciar su aporte social en los años venideros, en relación con una diversidad de otros procesos simultáneos, algunos concurrentes, recientes y asintomáticos, como los expuestos en este análisis.

Son, empero, varias las tareas pendientes para los Estados y las sociedades. Para las autoridades e instituciones competentes queda un desafío fascinante: la diferenciación de las remesas por origen nacional del remitente. Cuando ello se sepa se abrirá entonces otro mundo de relaciones hasta hoy desconocido. Esto es, se podrá analizar un panorama diferente, que ya está aquí, en pleno curso, aunque con datos e información desagregada, alguna sólo consultable por los propios agentes que la generan, que permitirá establecer cuál de las nacionalidades analizadas recurre más (y cuál menos), en frecuencia y en montos, a los envíos electrónicos de remesas; establecer en qué épocas del año ocurren los mayores y menores envíos, en qué regiones del país se reciben los mayores montos y en cuáles menos, las razones de que ello ocurra (sea por causas indirectas de política pública, directas de accesibilidad al servicio y de existencia y funcionamiento de la red social del migrante, entre otras). Habrá una manera de aproximarse a estimar montos de envíos para la continuación de la trans migración centroamericana por México, y una estimación de los correspondientes a los que tienen que retornar sin haber logrado concluir su viaje al norte. Se sabrá qué proporción de la remesa recibida se utiliza para cubrir los distintos costos de

traslado y la que se utiliza para alimentos y salud, entre otras interrogantes. Un mundo en curso será entonces conocido —o reconocido— en su multiplicidad de efectos y participaciones: el de las remesas para los centroamericanos transmigrantes en México.